

## Jornada Cátedra Giberti

“La problemática agraria en la Argentina. Perspectivas de la agricultura familiar en la actual coyuntura económica”

### Primera mesa redonda

Coordinadora Mabel Manzanal: Vamos a comenzar esta mesa con expositores que toda esta platea está muy interesada en escucharlos. En primer lugar, Deolinda Carrizo, del MOCASE de Santiago del Estero; luego Miguel Ángel González, de la Cooperativa Río Paraná y el Movimiento Agrario Misionero; Jorge Ñancucheo, de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de la Argentina y del Consejo de la Agricultura Familiar, y Benigno López, del Frente Nacional Campesino de Formosa. Muchas gracias por estar aquí, y en lo que a mí respecta, agradezco al IADE, a la Cátedra Giberti y al Centro Cultural de la Cooperación por la oportunidad de coordinar esta mesa.

Me pidieron que haga una presentación del contexto sobre la temática que nos ocupa. Voy a tratar de ser lo más breve posible, para dar lugar a la palabra de los compañeros de las organizaciones, que nos van a traer datos mucho más interesantes que los que podemos aportar desde aquí.

Esta exposición trata de reflexionar acerca de la situación de la agricultura familiar y las economías regionales bajo el actual gobierno del PRO y bajo las medidas de corte neoliberal que está llevando a cabo.

Los objetivos y los instrumentos de una política neoliberal de ajuste se explican a partir de un diagnóstico que afirma que el Estado está sobredimensionado; que es ineficiente e inoperante; que hay un incremento del gasto público; que la estructura industrial es muy diversificada y sobredimensionada; que no tiene ventajas comparativas en el mercado internacional porque es costosa e ineficiente.

Este argumento justifica el ajuste en pos de detener el proceso inflacionario y alcanzar la estabilidad de precios. Y para ello se promueve la apertura de la economía como requisito, a su vez, para “insertarnos” en el mundo. En este marco, se inserta la liberalización de los mercados de capitales a partir de ciertos instrumentos como la eliminación de las retenciones a las exportaciones; la reducción de los aranceles a la importación; la disminución del déficit fiscal mediante la reducción del gasto; la liberalización del mercado cambiario y financiero; la reducción del empleo público; y la supresión de los préstamos de fomento.

Se trata de un conjunto de medidas relacionadas e instrumentos que seguramente son recordados por buena parte de esta audiencia. Porque muy similar a todo lo aquí expresado fue el discurso pronunciado hace cuarenta años, el 4 de abril de 1976, por el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976–1981) de la dictadura de Rafael Videla.

Efectivamente corresponde mencionarlo y recordarlo. Por varias razones. Por un lado, porque frecuentemente se sostiene que este gobierno no tiene plan. Una parte de las fallas de la política macrista se explican con esta argumentación. Y no es verdad: tiene un plan pero lo oculta, cuando hace 40 años Martínez de Hoz lo expuso orgullosamente en cadena nacional.

El plan del gobierno actual pareciera inconexo, desperdigado pero si lo sistematizamos, lo ordenamos y lo organizamos, es casi idéntico al plan de Martínez de Hoz de 1976. Y se trata de un proyecto de gobierno al que muchas veces se recurrió en la historia argentina. Vale recordar que hace casi 60 años, con Alvaro Alsogaray (1959–1961) como ministro de economía del gobierno de Arturo Frondizi, el ajuste se ocultaba bajo el célebre “hay que pasar el invierno”, expuesto también en cadena nacional. O la propuesta liberal de Krieger Vasena como ministro de economía (1967–1969) de otra dictadura, la autoproclamada “Revolución Argentina”, encabezada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. Krieger Vasena suspendió los convenios colectivos de trabajo y los aumentos de salarios por 2 años. Y una réplica más reciente la vivimos con el gobierno de Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía entre 1991 y 1996.

Una buena parte de la sociedad recuerda y sabe a dónde conduce todo esto. Porque ya vivimos el incremento sostenido y exponencial de la deuda externa hasta tornarse inmanejable. Sabemos de la trampa a la que nos condujo la Ley de Convertibilidad de Cavallo (\$1 = u\$s1) que desembocó en la peor crisis que debimos pasar los argentinos a partir de 2001 luego de la gran crisis de 1930. Todos estos son los antecedentes y referentes de la actual política que se ocultan cuidadosamente.

Acá tengo algunos datos de la política económica que los voy a mencionar de forma muy abreviada. Todos fueron promovidos por el presente gobierno en un desenfreno de hiperactividad que entiendo debiera asociarse con la urgencia de aplicarlos mientras se mantiene el consenso social ganado con la reciente elección.

Comenzamos con la devaluación del 40%, la liberalización del mercado de cambios, que significó fuga de divisas y transferencia de ingresos a favor de los capitales transnacionales especulativos. Seguimos con la eliminación de las retenciones a las exportadoras de granos, con la consiguiente transferencia de ingresos en beneficio del sector agropecuario exportador. Luego continuamos con la eliminación de las retenciones a la minería, medida no esperada, que sorprendió a muchos, que se consideró excesiva e innecesaria. Especialmente porque se traduce en transferencia de ingresos a un sector transnacional generador de riesgos ambientales y problemas de gobernabilidad en las provincias donde se encaran estas actividades extractivas. Sin contar con que conjuntamente conlleva a conflictos sociales promovidos por los sectores sociales que se oponen a estas modalidades extractivas y defienden el medio ambiente. Como así también, se traduce en disputas entre los gobiernos provinciales por atraer este tipo de inversiones; sobredimensionando paralelamente las formas rentísticas como modelo de

generación de ingresos de parte de los gobiernos provinciales. Otra medida de estas características fue la duplicación del precio pagado por el gas en boca de pozo, que significó una transferencia a las petroleras de 3.000 millones de dólares.

Todo lo anterior se ha traducido en aumento del endeudamiento público nacional y provincial. Conjuntamente, se ha puesto en riesgo el sistema jubilatorio público. Hay una manipulación política del sistema de coparticipación federal, porque no se está promoviendo una discusión y actualización de la ley de coparticipación federal que implique una mejor distribución de los recursos entre las provincias.

Además, hay numerosos impuestos absolutamente regresivos que deberían ser tratados en una nueva ley de coparticipación federal, pero eso no se discute. Se han eliminado los subsidios y ha habido aumentos excesivos de todas las tarifas, como estamos experimentando últimamente.

Todo esto significa aumento del costo de vida y de la inflación, que ya pasó la barrera del 40% y significa para todos nosotros deterioro salarial y recesión económica, sub-consumo y achicamiento del mercado interno.

En décadas anteriores todo esto implicó la desaparición de 90.000 pequeños productores y por lo tanto desocupación y pérdida del empleo.

Se está impulsando un desempleo masivo, con despidos masivos de trabajadores del sector público y privado. Y es sabido que por cada empleo formal que se pierde desaparecen tres empleos informales. Conjuntamente, hay una retracción en la actividad de la construcción, sobre todo de la obra pública; cierre de comercios y de pequeñas empresas.

Mientras las PyMEs están siendo marginadas se sostiene una economía que restringe el empleo y el mercado interno.

Con todo lo cual se promueve, en definitiva, un aumento de la pobreza y de la indigencia a pesar del engañoso lema “pobreza cero”. De aquí el aumento y necesidad de ampliación de los comedores para alimentar a los niños más carenciados.

Y éstas son solo algunas de las cuestiones que están sucediendo. Todas incide en nuestras actividades y desde luego, en la agricultura familiar.

En este marco, es importante que tengamos presente que no es que el gobierno esté perdido o esté haciendo las cosas mal. Nada de esto. El gobierno está haciendo una fenomenal transferencia de ingresos, que se oculta en beneficio de sectores transnacionales y especulativos y de las exportadoras extranjeras.

Es en este contexto que estamos jugando nuestra propia vida y actividades, siendo la agricultura familiar uno más de los sectores marginados por la política pública; con las consiguientes consecuencias que mellan su continuidad, estabilidad y afirmación.

Los agricultores familiares tienen dificultades históricas para acceder al crédito y el aumento de las tasas de interés lo restringe aún más. Del mismo modo, ven afectada la comercialización de sus

productos. Pues a las limitaciones estructurales se suma la actual modalidad de apertura al mercado externo, que permite el ingreso de una enorme diversidad de productos importados compitiendo con los propios. A lo cual se agrega un mercado de trabajo con problemas de empleo en aumento, impidiendo o limitando la complementación de ingresos vía el ejercicio de otras actividades -urbanas o rurales-. Estas prácticas de multiocupación se constituyen en una utopía cada vez más alejada de la realidad circundante.

Tampoco tenemos que olvidarnos de algo que se ha heredado (palabra que usa mucho el gobierno actual del PRO): me refiero a la dominación territorial de los *commodities*. En el Cono Sur hemos vivido una década de un modelo extractivista y de reprimarización de la economía, que ha significado despojo de recursos, avasallamiento, persecución de la población y judicialización de la protesta social. Tenemos que reconocer que eso sí puede considerarse realmente como una herencia que viene del gobierno anterior. El problema es que, en este caso no se trata de una herencia que se reconozca, que se ponga en cuestión. Todo lo contrario, esto que se heredó se va a profundizar. Ya se observa desde el inicio de este gobierno, entre sus primeras medidas estuvo la disminución de las retenciones a los principales productos del agro. Pero además, todo indica que se promoverá el aumento de la producción del agro y especialmente la sojera. Claramente lo señala el Ministro de Agricultura, Buryaile, cuando afirma que se está buscando el incremento del área sembrada, sin ninguna política compensatoria complementaria.

El modelo extractivista genera en las comunidades originarias para los campesinos y la agricultura familiar, hambre, migración forzada, enfermedades, contaminación del agua por las fumigaciones con agrotóxicos, destrucción de puestos de trabajo, deforestación, depredación de suelos, pérdida de biodiversidad.

Y todo esto se da, además, en el marco de la vulnerabilidad estructural de la agricultura familiar. Temas que ya fueron tratados en la Cátedra Giberti en diferentes oportunidades. La precariedad en el acceso y la tenencia de la tierra, el retraso tecnológico, las restricciones en infraestructura y equipamiento, los problemas de comercialización son limitaciones históricas de la agricultura familiar. Y todo esto se traduce en continuadas, paulatinas y consecutivas, pérdidas de productores, como está sucediendo en la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y la vitivinicultura en Cuyo.

De todos modos, no podemos dejar de mencionar que durante la última década se han generado, asimismo, acciones políticas que se tradujeron en fortalezas para algunos sectores sociales históricamente marginados y desprotegidos. Estas son también “herencias” del gobierno anterior, pero que potenciaron y empoderaron a la agricultura familiar que nos ocupa y preocupa en este encuentro.

Muchas de estas acciones consistieron o se centraron en el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada con la agricultura familiar. Nos referimos a la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, el monotributo social, el Registro Nacional de los Trabajadores Rurales, la ley de agricultura familiar, la movilización y organización de los productores contra la ley de semillas y las imposiciones de Monsanto,

la ley de regulación de la adquisición de tierras por parte de extranjeros (recientemente condicionada por el gobierno macrista, que eliminó ciertos controles) y todo lo que tiene que ver con los procesos de comercialización, como el impulso a las ferias francas, a las cadenas cortas de comercialización y a la economía social y solidaria.

Entiendo que todas estas reflexiones se dirigen a repensar el presente de la agricultura familiar. Ya que estamos ante un nuevo bloque de poder, controlado por un sector hegemónico de agentes financieros y empresas transnacionales ligadas al sector agroalimentario exportador, a la inversión en recursos primarios, a la profundización de la financiarización de la economía nacional. Ese núcleo hegemónico es el que recibe la mayor transferencia de recursos del presente.

Ese nuevo bloque de poder promueve alianzas con grupos económicos de la burguesía local y con grandes terratenientes pampeanos, participando asimismo subordinadamente sectores sociales medios y de la clase obrera. Para consolidarse en esta postura, el gobierno está buscando y sosteniendo una nueva inserción internacional, representada por tratados de libre comercio, como el de Mercosur y Unión Europea y el Tratado de Asociación Transpacífico.

Este contexto nos indica que estamos transitando una realidad muy dura, ante la cual importa estar atentos y ser conscientes de lo que está sucediendo. Y en esa realidad, que es una confluencia de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que logramos y de lo que se nos impone, deberemos buscar y discutir formas, acciones sociales y políticas, que nos permitan avanzar hacia a un lugar diferente del que se nos está proponiendo. Muchas gracias y paso a darle la palabra a la compañera de Santiago del Estero.